

V ENADIR (Encuentro Nacional de Antropología do Direito), Seminario Judicialización de la violencia de género, FFLCH- USP

28 al 31 agosto de 2017, San Pablo, Brasil

Castelnuovo Biraben, Natalia

UBA/CONICET

naticastelnuovo@gmail.com

Olga Brunatti

Lias-FCNyM/UNLP

obrunatti@yahoo.com.ar

Título: Escenarios y contextos jurídicos de la violencia de género. El caso de las provincias de Salta y Buenos Aires, Argentina

Resumen: En un ejercicio comparativo, en este trabajo nos proponemos presentar y analizar dos escenarios y contextos jurídicos distintos: el de la provincia de Buenos Aires y el de la provincia de Salta. Partiendo de la normativa vigente en materia de violencia de género, reconstruiremos brevemente sus orígenes y fundamentos como parte de un objetivo mayor que busca explorar los modos en que por un lado, se ‘gestiona’ la violencia y, por el otro, se ‘accede’ a la justicia en distintas dependencias provinciales. Nuestra propuesta se enmarca en un proyecto de investigación más amplio interesado en mapear y describir los mecanismos y prácticas de promoción de justicia, de reparación moral y de mediación en casos de la llamada ‘violencia de género’, en Brasil y Argentina. Consideramos que la adopción de un abordaje comparativo es central al proyecto, en tanto opera como un sistema de traducción que permite multiplicar las perspectivas de comprensión de situaciones sociales localmente situadas y que, como sostiene Kant de Lima, posibilita un ejercicio de relativización contrastando categorías jurídicas y sociales.

Introducción

Las luchas de distintos colectivos contruidos como movimientos u organizaciones sociales y políticas han contribuido a jerarquizar el problema social de la violencia de género. Las discusiones y las denuncias sobre este problema social que tiene una alta incidencia en el ámbito intrafamiliar aportaron a su reconocimiento otorgándole visibilidad al punto de convertirlo en un fenómeno público. Resultado de procesos locales y globales, la dimensión transversal de este fenómeno nos plantea un desafío mayor donde las investigaciones comparativas son centrales en la búsqueda de soluciones particulares a partir de las cuales se definen las políticas de intervención (Rifiotis, 2003).

En Argentina, la recuperación de la democracia abrió un espacio importante para que las mujeres reclamaran sus derechos formales y los recursos efectivos para intervenir sobre el conjunto de las instituciones. Sin embargo, dado que “la consagración legislativa de los derechos no crea de por sí las condiciones necesarias para su eficaz ejercicio” (Birgin, 1998: 62), una vez que la violencia de género fue incorporada al debate social y legitimada como tema, fue menester crear los instrumentos que garantizaran a las mujeres el ejercicio de sus derechos. Se jerarquizan entonces los recursos legales como tema relevante, lo cual condujo a un debate polarizado entre quienes ponían el foco en el derecho penal, enfatizando la necesidad de tipificar la violencia familiar como delito y quienes pensaban que, en tanto conflicto privado, éste debía resolverse en el ámbito de la justicia civil. En ambos casos, como en tantos países, las políticas sociales que han pretendido reducir, si no, eliminar la impunidad de este tipo particular de fenómeno, se han ido caracterizando por la creación de dispositivos que han privilegiado la lectura jurídica de los conflictos intrafamiliares, tendiendo a la judicialización de los mismos (Brunatti, 2006).

En el presente trabajo nos proponemos presentar y analizar la violencia de género en dos escenarios y contextos jurídicos distintos: el de la provincia de Buenos Aires y el de la provincia de Salta. Si bien nuestro punto de partida es la normativa vigente, la intención es poder dar cuenta del proceso sociopolítico por medio del cual la violencia de género se construye y define para ambos estados provinciales como una ‘problemática’. Entendemos que el ‘reconocimiento’ estatal es un primer paso de una serie de medidas que dan lugar a las formas específicas que asume la gestión de la violencia de género en el campo de la justicia. En este sentido, la atención que colocaremos en estudiar la producción de un cuerpo de normas forma parte de un objetivo más amplio que busca explorar los modos en que por un lado, se ‘gestiona’ la violencia y, por el otro, se ‘accede’ a la justicia en distintas dependencias provinciales. Para el caso de Salta, reconstruiremos el escenario jurídico y político en el que se declara la emergencia pública en materia social por violencia de género, atendiendo a la normativa preexistente en materia de violencia familiar¹. En la provincia de Buenos

¹ El proyecto cuenta con otros objetivos específicos tales como: (a) realizar un seguimiento de la Ley 7857, relevando su implementación en instancias específicas de interacción en Juzgados especializados en Violencia Familiar y de Género en el Distrito Judicial de Tartagal; (b) relevar las capacitaciones realizadas en materia de violencia de género y familiar con operadores de justicia; (c) explorar representaciones y prácticas de los operadores de justicia; (d) analizar cómo se gestiona la violencia de género; (e) analizar el Programa de Orientación y Asistencia Jurídica a las Víctimas y Familiares de

Aires partiremos de las políticas sociales que han pretendido reducir, si no eliminar, este tipo particular de fenómeno a partir de la creación de dispositivos que han privilegiado la lectura jurídica de los conflictos intrafamiliares, tendiendo a la judicialización de los mismos.

Implementamos la comparación de los dos escenarios normativos provinciales para desarrollar el trabajo, considerando que esto nos permitiría poner de relieve lo específico de cada caso y “desnaturalizar” nuestra mirada sobre el proceso sociopolítico de construcción e instalación de la problemática. Nuestro abordaje comparativo contempló algunos preceptos y advertencias señaladas por Kant de Lima (1999), quien propone pensar la comparación como un sistema de traducción que, por un lado, permite multiplicar las perspectivas de comprensión de situaciones sociales localmente situadas y, por el otro, posibilita un ejercicio de relativización contrastando categorías jurídicas y sociales. A tal efecto, retomamos los planteos de Geertz en torno a la traducción cultural, entendiendo por esta que los “conceptos deben mantenerse próximos a la experiencia². Siguiendo esta propuesta, nuestro punto de partida al abordar la normativa sobre violencia de género fue tomar los sentidos impuestos por los distintos operadores de la justicia a dicha categoría. Sentidos que, lejos de ser homogéneos se presentan en el campo de disputas por imponer una nominación legítima a quienes constituyen este conjunto social particular (Bourdieu, 1990; 1991). Esto es, no apuntamos a un análisis de la normativa, sino que tomamos como objeto las representaciones que los operadores de la justicia salteña y bonaerense hacen de dicha legislación en relación con los justiciables.

El estado salteño legislando

En julio de 2011 el asesinato de dos jóvenes turistas franceses en la provincia de Salta conmocionó a la sociedad salteña y francesa. Los cuerpos de Houria Moumni y

Víctimas de Delitos Graves y el Programa Asistir, atendiendo en ambos casos a los efectos de su implementación.

² “Poco más o menos, un concepto de experiencia próxima es aquel que alguien –un paciente, un sujeto cualquiera, en nuestro caso un informante– puede emplear naturalmente y sin esfuerzo alguno para definir lo que sus prójimos ven, piensan, sienten, imaginan, y que podría comprender con rapidez en el caso de que fuera aplicado de forma similar por otras personas. Un concepto de experiencia distante es, en cambio, aquel que los especialistas de un género u otro –un analista, un experimentalista, un etnógrafo, incluso un sacerdote o un ideólogo– emplean para impulsar sus propósitos científicos, filosóficos o prácticos” (Geertz, 1986: 73).

Cassandre Bouvier, ambas de una veintena de años, fueron encontrados en la Quebrada de San Lorenzo, a 10 kilómetros al oeste de la capital salteña, y mostraban signos de haber sido sometidos sexualmente³. Ante lo ocurrido, con celeridad, el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, salió por diversos medios de comunicación manifestando que se trataba de “un hecho aberrante” y que la justicia provincial contaba con su colaboración para determinar quiénes eran los responsables de dicho crímenes, al mismo tiempo que se iniciaban las gestiones por medio de la Cancillería y la embajada francesa en el país, para contactar a los familiares de las víctimas. A partir de entonces, el gobierno salteño recibió presiones internacionales por el esclarecimiento del caso⁴, puesto que a un año de los crímenes existían una serie de detalles sin resolver.

A un año de estos hechos, en julio de 2012, la muerte de otras dos jóvenes vuelve a golpear a la sociedad salteña. Es el caso de Yanina Nüesch y Luján Peñalva cuyos cuerpos fueron encontrados colgados de un árbol en un barrio céntrico de la capital provincial⁵. Las muertes de las adolescentes de 16 y 19 años respectivamente, fueron prontamente rotuladas por el gobernador como de “suicidios” (se habló de “pacto de suicidio”), y se sostuvo que los cuerpos no presentaban indicios de violencia. En disconformidad con el tratamiento que recibía el caso, los padres de una de las jóvenes expresaron el descuido hacia ciertas pruebas que no lograban esclarecerse, la sospecha sobre el novio de unas de las víctimas y fundamentalmente ponían de relieve la celeridad con la que el gobernador salió en conferencias de prensa a defender la hipótesis de un pacto de suicidio, cuando las pericias médicas de las autopsias no se habían realizado. Transcurrido un año de su muerte, la causa seguía rotulada como “muerte dudosa”. Sobre la investigación judicial que contaba para ese entonces con más de 1000 hojas, el informe oficial sostuvo la probabilidad de que ambas se hayan colgado de una única soga, mientras que una pericia paralela dejaba abierta la posibilidad de que se tratase de homicidio. La familia de una de las jóvenes muertas remarcó que existían una serie de contradicciones en la causa que debían aclararse ante la justicia. El costo político que estas nuevas muertes tan mediatizadas podrían traerle al gobierno de

³ Es interesante notar que esta información figuró en las noticias del caso, si bien ningún diario tituló sus notas en referencia a la violencia de género y sexual. Por ejemplo, el diario parisino *Le Figaro* publicó el 8 de agosto de 2011 que “la causa sexual” estaría entre los orígenes de los crímenes.

⁴ El gobierno francés envió un equipo de investigadores para que se integraran a la causa y supervisaran todos los detalles vinculados a las muertes y entre ambos países establecieron una “cooperación bilateral” franco argentina entre jueces de instrucción. La noticia fue titular de los diarios *Liberation*, *Le Figaro* y *Paris Match*.

⁵ Sus muertes fueron nota del diario provincial *El Tribuno*, el diario porteño *Página 12*, entre otros.

Urtubey fue decisivo para desechar todo tipo de indicios de que se trataba de un nuevo caso de violencia de género.

La repercusión mediática de estos casos sumada a una importante cantidad de marchas demandando el esclarecimiento de crímenes y desapariciones de mujeres⁶, denuncias y reclamos realizados desde ámbitos académicos-militantes⁷ y de algunas organizaciones que alertaban sobre los altos índices de violencia⁸, llevaron a que el gobierno reconociera la “violencia de género” como una ‘problemática’ de la que el estado provincial debía ocuparse. Este ‘reconocimiento’ de la problemática a través del acto de nombrarla (Bourdieu, 1997) fue el primer paso de una serie de medidas que le sucedieron, figurando como antesala la sanción en 2002 de la Ley provincial de Protección de Víctimas de Violencia Familiar (Ley N° 7202). Esta ley caracterizó al sujeto de violencia como “Toda persona que sufre daño psíquico o físico, maltrato o abuso por parte de algún integrante del grupo familiar conviviente”. La distancia entre la existencia de esta ley y su aplicación por parte de distintos agentes estatales ante el emblemático asesinato en 2004 de Rosana Alderete y sus hijos en manos de su esposo, llevó a que en 2006 se sancione la Ley N° 7403 de Protección de Víctimas de Violencia Familiar⁹ (y su ampliatoria N 7406). La Ley N° 7403 describe a la persona que sufre violencia como víctima y la caracteriza como: “Toda persona que sufre por acción, omisión o abuso, daño psíquico o físico, maltrato moral, financiero o económico notoriamente ilegítimo, sexual y/o en su libertad, aunque no configure delito, por parte de algún integrante del grupo familiar”. En el marco de esta nueva ley podemos observar cómo se amplía la definición de la persona que sufre violencia, tornándose a nuestro entender cada vez más difusos y porosos, los límites de aquello que constituye o no violencia. Si bien para ese entonces, la definición de violencia familiar o doméstica todavía no incluía en su acepción la noción de violencia de género. El giro recién se

⁶ Entre otras muertes por violencia de género, cabe destacar la de Abigail Antelo, de Salvador Mazza, y de Evelyn Beatriz Rivero, en Orán. Martín Valdez y Martín Sánchez, 2013, documental.

⁷ Desde la Comisión de la Mujer de la Universidad Nacional de Salta, La Multisectorial de Mujeres y Mumala y el Instituto Jurídico de Género distintos ámbitos que confluyeron en el reclamo sobre la necesidad de un decreto de emergencia contra la violencia de género.

⁸ Datos del Poder Judicial relevaban que entre enero de 2013 y mediados de 2014 hubo un promedio de una mujer asesinada por mes, mientras que la organización salteña La Otra Voz Digital relevó 80 femicidios desde 2008, según la fuente periodística diario mdzol.com del 8 de septiembre de 2014.

⁹ El primer anteproyecto de esta ley se remonta al año 2002, cuando fue presentado en la legislatura y logró obtener la aprobación tanto de la cámara de diputados como la de senadores y el veto por el poder ejecutivo (Ramos, s/f).

produce en 2015 con la sanción de la Ley provincial N° 7888¹⁰ que establece expresamente la “protección contra la violencia de género”.

Ahora bien, en paralelo a estas reformas jurídicas en el año 2010 se crea la Oficina de Violencia Familiar¹¹ (OVIF) dependiente de la Corte Suprema de Justicia y se reforma el código procesal penal provincial¹², implementado a partir de 2012¹³. Como sostuvo el Ministro de Seguridad provincial, Eduardo Sylvester (2012-2015) durante una conferencia de prensa: “La emergencia pública (...) hemos escuchado a una enorme cantidad de instituciones que nos la pedían, que nos pedían distintas medidas, el gobernador toma la decisión hoy de declarar la emergencia y además de hacer varias reformas estructurales...”¹⁴.

Las cifras oficiales a partir de datos relevados en juzgados salteños indicaron que entre agosto de 2014 y 2006, cuando se puso en vigencia la Ley de Protección de Violencia Familiar, se contabilizaron un total de 103.325 causas ingresadas por violencia doméstica. Por otro lado, la organización feminista La Otra Voz relevó un total de 73 femicidios en Salta entre 2004 y 2011¹⁵. Por su parte, la OVIF registró en el 2013 un total de 15.000 denuncias por casos de violencia de género. Si bien las estadísticas, como sostiene Scheper-Hughes (1992) en relación a las estadísticas demográficas, son una fuente de construcción de ideología y de poder estatal y, en esa misma línea, una expresión de las operaciones de totalización que, tal como plantea

¹⁰ La Ley 7888 en su Art. 26 dice que “En todo lo que no esté previsto en la presente Ley, y siempre que resulte compatible con la misma, serán de aplicación subsidiaria las normas procedimentales de la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollaren sus relaciones interpersonales, la Ley Provincial 7.403 de Protección de Víctimas de Violencia Familiar y el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Salta.

¹¹ La OVIF cuenta con equipos de profesionales que tienen a su cargo la atención y contención de las víctimas.

¹² El Código procesal provincial de 1985 no refiere a ningún tipo de violencia hacia la mujer, mientras que el código de 2011 y su respectiva Ley N° 7690 hace mención a esta figura en su Art. 382, cuando sostiene que una de las medidas de coerción en sustitución de la prisión preventiva que el juez o tribunal pueden imponer es “el abandono inmediato del domicilio cuando se trate de hechos de violencia doméstica y la víctima conviva con el imputado”.

¹³ La efectiva implementación de la reforma fue promulgada bajo Ley N° 7690. Uno de los impulsores de la reforma del Código Procesal Penal fue el senador peronista y hermano del gobernador, Rodolfo Urtubey. Si bien no me detendré a analizar el nuevo código penal, me interesa señalar que éste trasladó facultades del poder judicial al ámbito del Ministerio Público. Esto significó una importante reestructuración de las estructuras judiciales existentes a nivel provincial. La reforma otorgó mayor poder a los fiscales, que con el sistema acusatorio pasaron a ser responsables de la instrucción.

¹⁴ Nota periodística 9 de septiembre de 2014, <http://www.salta.gov.ar/prensa/noticias/el-gobierno-decreto-la-emergencia-social-por-violencia-de-genero-en-todo-el-territorio-provincial/33603>

¹⁵ Estos datos fueron relevados en un informe por Beatriz Guevara y los aportes provenientes de *La Otra Voz Digital*. Según un informe realizado por la Asociación Civil la Casa del Encuentro - Salta se encuentra “entre las tres provincias con más femicidios del país”.

Bourdieu (1997), el Estado lleva adelante en su búsqueda por concentrar información que construya y legitime su propio campo de poder, lo cierto es que la ausencia de estadísticas oficiales (en este caso en relación a la violencia) también puede pensarse como una expresión de la violencia simbólica estatal que torna difusos sus contornos al negarle entidad.

Así, en septiembre de 2014 el gobierno de la provincia, en acuerdo general de Ministros, toma como medida declarar la emergencia pública en materia social por violencia de género, por el plazo de dos años en todo el territorio provincial¹⁶. El decreto de Necesidad y Urgencia N° 2654, convertido en Ley N° 7857, habilitó al poder ejecutivo disponiendo de partidas presupuestarias, a realizar una serie de acciones y políticas públicas orientadas a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género. Se dispuso, entre otras medidas, la creación de juzgados en violencia familiar y juzgados especializados en violencia de género, un juzgado fiscal penal de violencia de género, hogares de protección y albergues de mujeres y la distribución de botones anti-pánicos. Mientras se implementaban estas medidas, los juzgados de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia continuaron actuando en esta materia. Entre otras medidas, se propuso la creación de un registro único de víctimas de violencia de género para tener datos concretos a partir de los cuales evaluar y elaborar políticas públicas en la materia y capacitar y sensibilizar en la temática. Se estimó necesario fortalecer la aplicación de la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, sancionada en marzo de 2009. Como también se planteó la necesidad de garantizar la implementación de políticas públicas orientadas a enfrentar el problema de la violencia, en los diversos niveles de gobierno. En el marco de un plan provincial para la “Prevención, Abordaje y Erradicación de la violencia de género” se propuso realizar un trabajo en prevención y promoción de los derechos humanos, la atención y la asistencia integral a las víctimas de violencia de género y brindar acompañamiento durante el proceso. En el marco de estos anuncios se decreta el Programa de Orientación y Asistencia Jurídica a las Víctimas y Familiares de Víctimas de Delitos Graves (Decreto N° 1881/2014).

¹⁶ Los decretos de necesidad y urgencia pueden pensarse como un recurso/dispositivo político que torna imprescindible el poder de la justicia. Esta medida resulta en una ‘intromisión’ del campo ejecutivo en el legislativo. Se trata de un recurso recurrente en la gestión del gobernador salteño.

Un año después de declarada la emergencia en violencia de género, se ponen en funcionamiento los nuevos juzgados¹⁷ y se inician una serie de acciones dirigidas a capacitar y asistir a operadores de justicia. Asimismo, se plantea la creación del Programa Asistir (Decreto 2565/15) en el ámbito del Ministerio de Justicia, con el objetivo de brindar patrocinio jurídico gratuito a víctimas de delitos graves, habilitando que tanto las víctimas como sus familiares se constituyan como parte querellante en los procesos penales.

La provincia de Buenos Aires en contexto

Los años 1990 propiciaron una serie de modificaciones legislativas a nivel nacional que, según su especificidad, fueron proyectadas e implementadas de modo sectorizado por los distintos poderes del Estado. Entre ellas se instaló en la agenda pública la necesidad de “democratizar” los usos de las reglas penales a través de transformar sus procedimientos. Un ejemplo fue la Reforma Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires la cual entró en vigencia en setiembre de 1998. Centrándose en la transformación del Ministerio Público a través de dos secretarías especializadas denominadas “Centro de Asistencia a la Víctima” (CAV) y, “Mediación y Conciliación Penal” (MyCP) incorporó el patrocinio jurídico, la atención psicológica y social de las víctimas de delitos y la resolución pacífica de conflictos a través de métodos alternativos de resolución de conflictos. Cabe tener en cuenta que previo a la creación de dichas secretarías, la especificidad de la acción violenta producida entre los miembros de la pareja conyugal o la generada por uno o ambos miembros de la pareja y sus ascendientes o descendientes, se presentaba casi invisible para la justicia, donde los hechos violentos producidos en las esferas de las relaciones íntimas quedaban enmascarados por otro tipo de reclamos, tales como lesiones, amenazas, demandas de cuota alimentaria, de divorcio, fugas del hogar e incluso tentativas de suicidio. Caratulados según las conductas tipificadas en los Títulos I y III del Código Penal Argentino el accionar de la CAV y de MyCP va ganando relevancia en tanto constituye el primer espacio legítimo de la justicia provincial capaz de poner en jaque la problemática de la violencia familiar. Definida y valorada como problema grave, la

¹⁷ Los juzgados especializados se distribuyeron territorialmente del siguiente modo: dos en lo que judicialmente se conoce como Distrito Centro (2), uno para Orán, uno para Tartagal y otro para Metán.

violencia intrafamiliar fue perfilando el accionar de estas secretarías para con este tipo particular de víctima, a partir de tres cuestiones generales. La primera se centró en la atención diferencial de ese colectivo social¹⁸. El discurso común a ambos espacios institucionales, tales como “atención urgente”, “orientación”, “información”, “contención psicológica y social”, y “orientación y derivación hacia centros especializados de atención” debería responder al nuevo contexto donde el eje vertebrador de la “asistencia integral a la víctima” es el delito y sus concomitantes, esto es la denuncia, la prueba y su vinculación con el autor o imputado de su comisión. La segunda fue poner especial atención en evitar la superposición de instituciones intervinientes en los diferentes casos. Convengamos que la ausencia de una legislación específica proclive a ceder un espacio capaz de promover una comunicación fluida entre los distintos fueros actuantes del Poder Judicial, o entre esta institución y otras organizaciones estatales involucradas en el problema, como por ejemplo escuelas u hospitales podía impedir la celeridad de las acciones vinculadas a operar sobre ese “problema” y propiciar prácticas revictimizantes. La tercera fue promover modos de abordaje considerados más aptos como la resolución alternativa de conflictos.

Resulta interesante señalar que en la provincia de Buenos Aires, la ley 12569 “*de protección contra la violencia familiar*” entra en vigencia el 6 de diciembre de 2000, esto es, dos años después de que la Reforma procesal penal diera origen a las secretarías encargadas de intervenir sobre dicho fenómeno.

Mucha agua ha corrido bajo el puente desde la propuesta de esta ley, norma mediada por la emergencia de nuevas categorías que pretenden hacer sentido otorgando mayor contundencia al problema social de la violencia de género. Resulta interesante para el análisis que a nivel nacional, con la sanción de la Ley N° 26485 “de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales” la categoría “violencia familiar” desaparezca.

A modo de contextualizar, el Título I de la Ley Nacional inicia con las “Disposiciones generales” donde, a través de dos artículos señala el ámbito de

¹⁸ Para ello, se basó en la experiencia del Centro de Asistencia a la Víctima de Córdoba, Argentina, pero dado que la competencia de aquel se enmarca en el ámbito del Poder Ejecutivo, fue necesario resignificar los presupuestos y objetivos en función de los alcances y los límites que imponía el desarrollo de esta tarea en el nuevo ámbito de la justicia penal.

aplicación y el objeto¹⁹. En el Artículo 4º, “Definición” se señala: “Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal”. Y agrega: “Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes”. También expresa que “Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón”. En su artículo 5º clasifica “la” violencia a partir de enumerar “tipos” tales como física, sexual, económica y patrimonial, y simbólica. En el artículo 6º refiere a “Modalidades”, esto es, a las formas en que se manifiestan los tipos señalados. En este breve recorrido es interesante observar que en el punto a) de dicho artículo, la clasificación empleada es “violencia doméstica”. Y dando continuidad a la proliferación de ciertos discursos académicos, políticos y periodísticos se puede observar que ambas categorías aparecen subsumidas una en la otra. Sin embargo, como bien ha argumentado la antropología al interpretar las relaciones de parentesco en distintos contextos socioculturales, subsumir, sino asimilar, lo “doméstico” a lo “familiar” se vincula con la naturalización de la familia nuclear y del ámbito doméstico como esfera que le es propia. Teniendo en cuenta que el término “doméstico” se centra en el lugar donde la acción violenta es ejercida y que “familiar” refiere a las relaciones de parentesco de los actores involucrados en esa acción entendemos que esta suerte de sinonimia puede oscurecer los sentidos otorgados por los diversos operadores institucionales que deben actuar en pos de la “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en

¹⁹ ARTICULO 1º Ambito de aplicación. Orden Público. Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República, con excepción de las disposiciones de carácter procesal establecidas en el Capítulo II del Título III de la presente. ARTICULO 2º — Objeto. La presente ley tiene por objeto promover y garantizar: a) La eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida; b) El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia; c) Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos; d) El desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres; 1947) e) La remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres; f) El acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia; g) La asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales y privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las mujeres y/o en los servicios especializados de violencia.

que desarrollen sus relaciones interpersonales”, tal como reza la Ley Nacional. Finalmente, el Capítulo II que refiere al “Consejo Nacional de la Mujer” como el “organismo rector encargado del diseño de las políticas públicas para efectivizar las disposiciones de la presente ley” y las “facultades” del mismo señala en su punto e) “Garantizar modelos de abordaje tendientes a empoderar a las mujeres que padecen violencia que respeten la naturaleza social, política y cultural de la problemática, **no admitiendo modelos que contemplen formas de mediación o negociación**” (el subrayado nos pertenece). Por lo tanto, toda práctica vinculada a la resolución alternativa de conflictos como las llevadas a cabo por la Secretaría de Mediación y Conciliación penal de la provincia de Buenos Aires entran en tensión con la Ley Nacional, quedando fuera de juego ante los casos de violencia de género.

Viejos y nuevos sentidos en la ley nacional

La Ley nacional de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales (Nº 26.485) sancionada en 2009, supuso una ampliación al antiguo concepto de violencia familiar presente en las legislaciones de la provincia de Buenos Aires y de Salta. Al caracterizar la violencia como acciones violentas a nivel interpersonal en ámbitos y situaciones muy disímiles esto trajo aparejado que el término pasara a englobar, por ejemplo, prácticas como la contracepción quirúrgica (26.130), el programa nacional de educación sexual integral (26.150) y la ejecución de la pena privativa de la libertad que contempla la prisión domiciliaria para madres con hijos menores de 5 años (26.472), entre otras.

Es interesante destacar que en una primera lectura de la Ley Nacional aparece utilizada la expresión violencia en plural. Lejos de apuntar con esta expresión a una multiplicidad de sentidos, la misma refiere a una tipología: violencia familiar, violencia contra las mujeres, delitos de género y violencia doméstica. Este tipo de tipologías enmascara es que la violencia es una relación social.

Otro aspecto a considerar en relación a la normativa nacional, en su intento de definir, asir la problemática, plantea que la ley supera “las fronteras de la violencia doméstica” avanzando en la superación del “modelo de dominación masculina”, incorporando una dimensión transversal que proyecta su influencia sobre todos los ámbitos de la vida. Asimismo, sostiene que la ley tiene la responsabilidad de ya no solo

de asistir, proteger y garantizar justicia a las mujeres víctimas de violencia doméstica, sino que le incumben los aspectos preventivos, educativos, sociales, judiciales y asistenciales vinculados a todos los tipos y modalidades de violencia. De esta selección de fragmentos de la ley se puede observar primero que define la violencia doméstica a través de una tautología. En segundo lugar que la relevancia está puesta en reconocer los modos (“tipos” y “modalidades”) en que la violencia se ejerce.

Asimismo, poner de relieve la incorporación, en el año 2012²⁰, en la ley nacional de la figura del femicidio cuyos antecedentes refieren a estudios feministas realizados por movimientos anglosajones en los años 1990 que acuñan el término en inglés *femicide* entendido como “el asesinato misógino de mujeres cometido por hombres” (Radford y Russell, 1992). De acuerdo con el jurista Rubén Figari, (2014), el concepto de femicidio tiene que ver con “el asesinato de mujeres en un contexto de género”, es decir, no todo hecho de violencia es femicidio sino aquel efectuado contra una mujer en un contexto de género (Buompadre, 2013). Las preguntas que nos caben son qué implica un “contexto de género”. En todo caso, el contexto de género, ¿refiere a un locus?; ¿incluye una relación social?; ¿es reducible al sexo femenino?

El femicidio para Figari se trata de un homicidio como cualquier otro cuya diferencia consiste en que “el sujeto pasivo es una mujer en un determinado contexto de género –fundamento de mayor penalidad- y el sujeto activo necesariamente debe ser un hombre” (2013: 9). En sus propias palabras “de aquí que el asesinato de cualquier mujer, en cualquier circunstancia, no implica siempre y en todo caso femicidio, sino solo aquella muerte provocada en un ámbito situacional específico, que es aquel, en el que existe una situación y sometimiento de la mujer hacia el varón, *basada en una relación desigual de poder*” (Buompadre, 2013: 154). La caracterización del femicidio retoma el par de opuestos activo/pasivo que asocia al primero de los términos con el hombre mientras que el segundo se asocia a la mujer. Se trata de un par de asociaciones que reproducen una falsa dicotomía sobre la cual la antropología ha extensamente debatido, pero, que como podemos ver continúan vigentes en algunos discursos y con cierta fuerza de poder explicativo y que construyen discurso de verdad y una representación ideal de las ‘víctimas’.

²⁰ La ley Nacional, a través de la ley de Reformas N 26791 modifica el Artículo 80 del código penal, entre las cuales, se incorpora el delito de “femicidio” al digesto punitivo.

Reflexiones finales.

De acuerdo con los escenarios de referencia se pueden observar ciertas ambigüedades sino contradicciones, que se expresan en las distintas normativas provinciales tanto como en la nacional. En el recorrido realizado las nuevas leyes van incorporando categorías que no necesariamente sustituyen a las precedentes dando cuenta de que la voluntad de cambio o transformación en las ideas y las prácticas que se tiene sobre el fenómeno denominado violencia constituyen un punto de inflexión necesario a ser develado; sobre todo, a partir de la inclusión de la figura del femicidio. Como hemos mencionado más arriba, tanto en la provincia de Salta como en la de Buenos Aires la primera tipificación que se pone en práctica ante casos de violencia de género es la de “violencia familiar”

La provincia de Buenos Aires empezó a (pre)ocuparse del problema de la violencia de género previo a la sanción de una normativa específica, no debemos olvidar que la misma se inscribió en el ámbito del Fuero penal a través de la reforma de su Código procesal en 1998, trayendo aparejada la creación de dos secretarías especializadas en ofrecer el patrocinio jurídico, la atención psicológica y social de las víctimas de delitos y la resolución pacífica de conflictos a través del método alternativo de mediación y conciliación penal. Con apenas dos años de diferencia, para el caso salteño se promulga la Ley provincial 7202 “de Protección de Víctimas de Violencia Familiar y para la provincia de Buenos Aires la ley 12569 “de Violencia Familiar”. De ambas surge la relevancia otorgada a la invisibilidad de dicho fenómeno social. Pero como también hemos señalado, los sentidos otorgados a la “violencia familiar” se interceptan con los concedidos a la “violencia doméstica” donde ámbito y *philia* aparecen como lo mismo. Es interesante retomar aquí que, como señalamos más arriba, mientras la provincia de Buenos Aires continúa con la misma normativa, aunque *aggiornada* a la normativa nacional e internacional, la provincia de Salta ha ido modificando su legislación apuntando a una mayor comprensión y/o precisión del fenómeno social. Sin embargo, en ambos relatos se hace mención a ciertos “mitos”, como por ejemplo que, el hogar es el espacio del amor y la comunión, que se trata de un problema privado, que la violencia es propia de los hombres, entre algunos otros, y que en la judicialización de estos conflictos estaría la solución. Otra cuestión interesante a tener en cuenta son los sentidos otorgados a las víctimas. Autoras como Brommer

(1997) y Connell (1997) han señalado que el discurso y las prácticas jurídicas, políticas y académicas objetivan a las mujeres en estereotipos. Estos estereotipos asignan la conducta esperada de las mujeres para ser consideradas meritorias o no de ayuda jurídica y asistencial y evidencian los modos en que son incluidas y excluidas en el derecho criminal formal. Partiendo de que el derecho nos constituye y nos instala frente al otro y ante la ley podemos destacar que “en el ámbito específico del derecho penal es la práctica jurídica la que atribuye la calidad de víctima, la que decide quién es víctima y quien no lo es, la que nos constituye en sujetos con ciertas y determinadas peculiaridades, status y facultades” (Bovino 2000: 81). No obstante, las definiciones reconocidas sobre la “víctima de delito” tanto a nivel nacional como internacional muestran que acuñar un concepto abarcativo no siempre se corresponde con la posibilidad/necesidad de explicar un problema social que se ha generalizado. No es casual que la Ley nacional 26791, que reforma el artículo 80 del Código penal incorporando el delito de femicidio no haya podido avanzar ni en términos epistemológicos ni prácticos en la construcción de la categoría víctima.

Bibliografía

- Birgin, Haydee (2000). “Introducción”; en: Haydee Birgin (comp) **El derecho en el género y el género en el derecho**; Editorial Biblos; Buenos Aires.
- Bovino, Alberto (2000). “Delitos sexuales y justicia penal”; en: **Las Trampas del poder punitivo. El género del derecho penal**; Editorial Biblos; Buenos Aires.
- Bourdieu, Pierre (1997). **Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción**. Anagrama. Barcelona.
- Brommer, Stephanie J.: “The legal liminality of battered women who kill their abusers”; Polar; vol. 20 N° 2; Nov. 1997; 16-33.
- Brunatti, Olga G. (2006). “¿Vulnerables o fabuladoras? La construcción de las víctimas de violencia familiar desde un ámbito especializado de la justicia penal de la provincia de Buenos Aires. **Tesis de Maestría inédita**. Ides/iDaes-UNSaM
- Connell, Patricia: “Understanding victimization and agency: considerations of race, class and gender”; Polar vol. 20 N° 2; Nov. 1997; 115-143.
- Geertz, Clifford (1994). “Desde el punto de vista del nativo”: sobre la naturaleza del conocimiento antropológico; en: **Conocimiento local Ensayos sobre la interpretación de las culturas**. Paidós, Barcelona.

Kant de Lima, Roberto (1999). policía, justiça e sociedade no brasil: uma abordagem comparativa dos modelos de administração de conflitos no espaço public”; en: **REVISTA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA Nº 13: 23-38 NOV.**

Ramos, Clara Roció. “El mundo legal detrás de un homicidio. Las tramas y escondrijos en las causas judiciales y los motivos que permitieron que un caso modifique las estructuras jurídicos-legales e institucionales en Salta. Presentado en Jornadas IDAES, s/f.

Rifiotis, Theophilos (2003). “As Delegacias Especiais de Proteção à Mulher no Brasil e a « judicialização » dos conflitos conjugais”. **Anuário 2003. Directo e globalização.** Editora Lumen Juris/UNESCO/MOST; 381-409.

Sheper-Huges (1997). **La muerte sin llanto. Violencia y vida cotidiana en Brasil.** Barcelona, Ariel.

Leyes Referenciadas

Ley provincial Salta Nº 7403 de Protección de Víctimas de Violencia Familiar.

Ley provincial Salta Nº 7202 de Protección de Víctimas de Violencia Familiar.

Ley provincial Salta Nº 7857. Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 654/14 – Convertida en Ley Declara la Emergencia Publica en Material social por Violencia de Genero en la provincia de Salta

Ley de la provincia de Buenos Aires Nº 12569 de Violencia Familiar

Ley 26. 485 nacional Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres

Ley 26791 Los delitos de género y la reforma penal.

Plan Para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, 2017-2019.

Dossier Legislativo. 2017. Violencia de género. Legislación nacional. Antecedentes parlamentarios. Doctrina y Jurisprudencia. Biblioteca del Congreso Argentina

Informe Anual 2016. Observatorio de Violencia contra las Mujeres. Salta.

Fuentes periodísticas consultadas

<http://www.tribuno.info/salta/nota/2015-8-18-18-6-0-parte-de-la-reforma-del-codigo-procesal-penal-inconstitucional-codigo-procesal-penal-corte-de-justicia-de-salta>

<http://www.salta.gov.ar/prensa/noticias/el-gobierno-decreto-la-emergencia-social-por-violencia-de-genero-en-todo-el-territorio-provincial/33603>

<http://informatesalta.com.ar/noticia/17589/la-provincia-declaro-la-emergencia-en-materia-de-violencia-de-genero>

<http://www.tribuno.info/salta/nota/2014-9-9-0-55-0-declaran-la-emergencia-por-violencia-de-genero-en-salta-violencia-de-genero-inseguridad-en-salta>

<http://www.mdzol.com/nota/556554-salta-declaro-la-emergencia-por-violencia-de-genero/>

<http://www.lagacetasalta.com.ar/nota/3617/politica/lagacetasalta.com.ar>

<http://www.lanacion.com.ar/1726080-salta-decretan-emergencia-por-violencia-de-genero>

<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm>

<http://www.pjudicialsalta.gov.ar/registro-violencia-domestica-salta.php>

<http://www.lefigaro.fr/international/2011/08/08/01003-20110808ARTFIG00293-touristes-tuees-en-argentine-le-scenario-qui-se-dessine.php>

http://www.liberation.fr/planete/2011/12/15/argentine-autopsie-d-un-double-meurtre_781945

http://tn.com.ar/policiales/un-ano-del-crimen-de-las-turistas-francesas-en-salta_261626

http://tn.com.ar/policiales/por-su-hija-por-las-mujeres-por-la-vida-segunda-parte_069857

<HTTPS://WWW.PAGINA12.COM.AR/DIARIO/SOCIEDAD/3-198868-2012-07-17.HTML>

http://www.quepasasalta.com.ar/noticias/policiales_2/salta-y-los-preocupantes-indices-en-materia-de-violencia-de-genero_80882

<http://www.tribuno.info/salta/nota/2013-7-16-13-48-0-yanina-y-lujan-dos-muertes-que-conmocionaron-salta>

<HTTP://DIARIOFEMENINO.COM.AR/V2/INDEX.PHP/2013/03/11/SALTA-SALTENAS-EXIGEN-PONER-FIN-A-LA-VIOLENCIA-DE-GENERO>

http://www.quepasasalta.com.ar/noticias/policiales_2/en-salta-asesinaron-a-una-mujer-cada-mes-desde-2013_75672

<http://www.tribuno.info/salta/nota/2014-2-23-1-50-0-violencia-de-genero-un-flagelo-en-salta>

<http://www.elintra.com.ar/politica/2017/1/26/violencia-genero-el-estado-fracaso-6340.html>

[HTTP://WWW.LAGACETASALTA.COM.AR/NOTA/82136/ACTUALIDAD/AL-REDEDOR-500-PERSONAS-MARCHARON-CONTRA-VIOLENCIA-MACHISTA.HTML](http://www.lagacetasalta.com.ar/nota/82136/ACTUALIDAD/AL-REDEDOR-500-PERSONAS-MARCHARON-CONTRA-VIOLENCIA-MACHISTA.HTML)

<http://www.eltribuno.info/salta/nota/2016-5-10-1-30-0-feministas-en-alerta-tras-el-caso-de-pablo-robbio-saravia>

<http://www.saltaentrelineas.com/violencia-de-genero-esto-es-un-apuro-por-cuestiones-politicas-porque-hay-situaciones-que-no-se-pueden-controlar-por-no-haberlas-atendido-en-su-momento/>